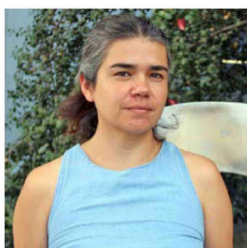


# Y NO ERAN LOS TORNQUETES



María Paz Trebilcock



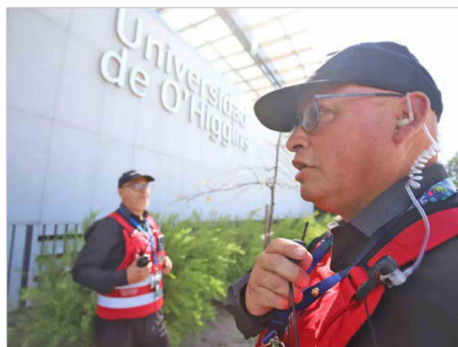
Loreto Quiroz

Académicas  
 Instituto de Ciencias Sociales, Universidad de O'Higgins  
 Instituto Milenio para la Investigación  
 en Violencia y Democracia (VIODEMOS)

**E**n medio de una época marcada por discursos de control, vigilancia y soluciones inmediatas frente a la inseguridad, esta columna propone detenerse y mirar en otra dirección. A partir de una experiencia concreta vivida en la Universidad de O'Higgins, sostenemos que el problema no siempre está donde parece estar y que, por ende, las soluciones tampoco.

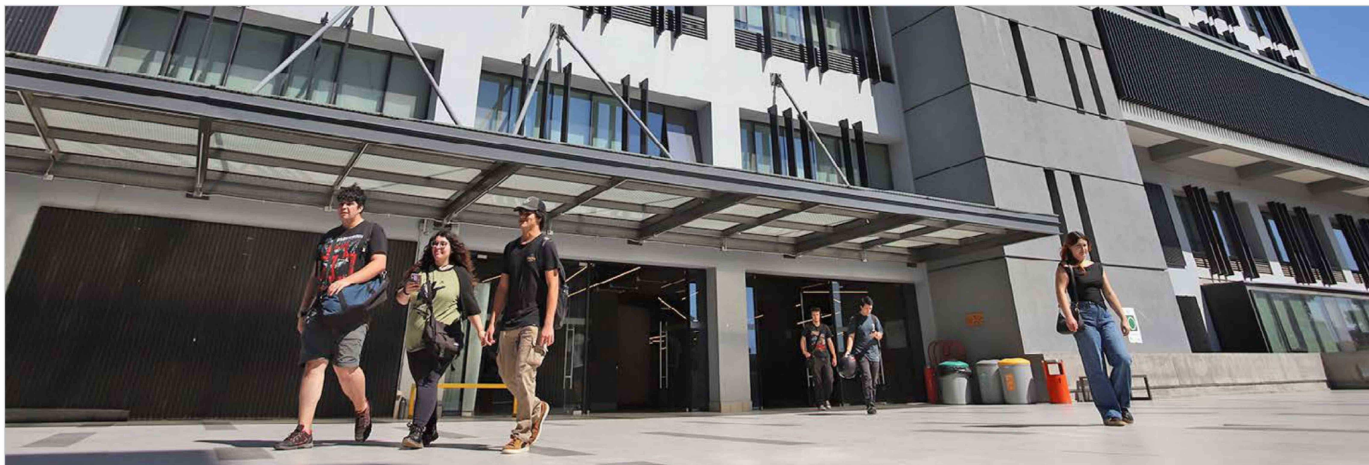
A raíz de las paralizaciones que se desarrollaron entre septiembre y noviembre en la Universidad de O'Higgins, se conformó una comisión de seguridad destinada a analizar los datos relativos a la incidencia de delitos cometidos dentro de la Institución y a recomendar medidas que permitieran mejorar la percepción de inseguridad en sus distintos campus. La comisión se conformó por representantes del estamento estudiantil y de funcionarios, funcionarias de la seremi de Seguridad de la Región y las autoras de esta columna, en su calidad de investigadoras en materia de seguridad.

A sus sesiones fueron invitadas distintas unidades de la Universidad y la Federación de Estudiantes. Como suele ocurrir en contextos de crisis, el debate inicial estuvo marcado por soluciones rápidas y visibles: más control de accesos, mayor vigilancia, protocolos más duros. Torniquetes, cámaras, credenciales. Sin embargo, tras varias



semanas de discusión y escucha, la principal conclusión a la que llegó la comisión fue, paradójicamente, que dentro de los campus de la Universidad prácticamente no hay denuncias de delitos y que las escasas denuncias que hay dan cuenta de delitos contra la propiedad no violentos (hurtos). De ahí que el aumento del control y el vigilantismo no parezcan mecanismos que vayan a garantizar una mejora sustantiva y sostenible en el tiempo en la percepción de seguridad. Lo que emergió del trabajo de la comisión fue algo mucho más complejo y, a la vez,

*continúa*



más frágil: la necesidad de forjar lazos, relaciones de convivencia sana y un sentido de pertenencia compartido. Este hallazgo puede parecer ingenuo en un país que suele presentarse cómo atravesado por una profunda crisis de seguridad, pero precisamente por eso resulta tan incómodo. En un contexto donde la discusión pública se ha reducido a cuántos guardias más poner, cuántas rejas levantar o cuántas facultades extraordinarias otorgar al Estado, hablar de convivencia suena casi fuera de lugar. Sin embargo, es un elemento que ha sido poco tematizado y que resulta absolutamente central para comprender la crisis que vivimos.

La amenaza del "otro" se ha vuelto omnipresente. Cada

vez que dejamos la protección del hogar, pareciera que el mundo exterior está poblado de riesgos: el que vive en la calle, el que "me mira feo", el que viene de otro país, el que parece pobre, el que parece cuico, el que siento que me mira en menos. La lista de "otros" amenazantes es interminable y se cuela en la vida cotidiana con una naturalidad inquietante. A ratos, da la impresión de que ya no estamos frente a un problema estrictamente de seguridad, sino frente a una pérdida mucho más profunda: la erosión de nuestra capacidad de convivir. El sentimiento de inseguridad emerge cómo un problema autónomo y dislocado respecto de las cifras de victimización. Pareciera que son otras las inseguridades que se canalizan a través del miedo al delito y las reacciones que este miedo provoca.

Vivir en sociedad implica, por definición, convivir con otros distintos.

Supone aceptar el conflicto, la diferencia, la incomodidad.

Sin embargo, el capitalismo extremo en el que estamos inmersos ha exacerbado de tal forma los valores individuales que hemos ido poniendo entre paréntesis las relaciones cotidianas. Competimos más de lo que cooperamos, desconfiamos más de lo que dialogamos. Al final del día, pareciera que hemos olvidado cómo relacionarnos

con otros: cómo transar, cómo resolver conflictos, cómo buscar puntos en común, cómo identificarnos con experiencias y valores ajenos.

En este sentido, lo que se ha identificado en la discusión pública como una crisis de seguridad es también —y quizás, sobre todo— una crisis de convivencia. Por supuesto que existen bandas, delitos violentos y presencia de crimen organizado, y negarlo sería irresponsable. Pero reducir toda la explicación a ese fenómeno es igualmente miope. La inseguridad no solo se alimenta de delitos concretos, sino también de la incapacidad de vivir juntos, de reconocernos como parte de un colectivo más amplio que el círculo íntimo. Estamos perdiendo la esencia misma de lo social: la vida con otros.

Esta incapacidad no es únicamente un problema valórico o cultural; se arraiga en lo más profundo del vínculo entre la ciudadanía y el Estado. Cuando se constituye el Estado moderno, los individuos ceden parte de su capacidad de

autogobierno a cambio de protección. El Estado adquiere el monopolio del uso legítimo de la fuerza con la promesa de garantizar seguridad y socializar el bienestar. Ese es el pacto fundacional. Y ese pacto hoy muestra grietas evidentes.

La falta de protección frente a catástrofes —y vaya que hemos tenido catástrofes en un contexto de cambio climático—, las múltiples puertas que se cierran cuando una familia enfrenta una enfermedad grave, la pérdida masiva de empleos e ingresos que aseguren condiciones mínimas de bienestar, la erosión de la movilidad social que durante décadas se prometió a través de la educación: todos estos fenómenos no son episodios aislados. Son la punta

de un iceberg que revela un debilitamiento estructural de las garantías que hacen posible la vida en común.

Aprender a convivir con otros no es solo una cuestión de buena voluntad individual; requiere condiciones materiales que lo hagan posible. Es difícil pedir confianza cuando la vida cotidiana está marcada por la precariedad, la incertidumbre y la sensación permanente de abandono. Es difícil construir comunidad cuando el miedo se instala como experiencia estructural y no como excepción; cuándo se desconoce el carácter

estructural de esa experiencia, a través de la fijación del delito como único factor explicativo.

Ciertamente, no todo es responsabilidad del Estado. Las sociedades también se construyen desde abajo, en los vínculos cotidianos, en las prácticas culturales, en las formas de relación. Pero es importante recordar que los valores y la cultura no flotan en el aire: son expresión directa de las condiciones materiales en las que se vive. Si seguimos precarizando la vida cotidiana, si normalizamos la inseguridad económica, laboral y vital, los vínculos que sostienen lo social seguirán debilitándose, y con ellos, nuestra capacidad de sentirnos seguros.

Quizás, entonces, no eran los torniquetes. Quizás el problema no se resuelve cerrando más puertas, sino preguntándonos qué tan capaces somos —como sociedad— de volver a abrir espacios de encuentro, reconocimiento y convivencia. Porque sin eso, ninguna cámara ni ningún guardia será suficiente.

